

EL SIGLO FUTURO,

DIARIO CATÓLICO.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Madrid, 6 reales un mes.—En Provincias, 20 reales un trimestre y 80 un año, suscribiéndose directamente en la Administración del periódico.—En el Extranjero, 50 reales un trimestre y 200 reales un año.—En Ultramar, 4 pesos fuertes el semestre.—Repúblicas americanas, 6 pesos fuertes el semestre.—Paquetes de 25 números, 4 reales.

PUNTOS DE SUSCRICION.—La administración del periódico, calle de Leganitos, número 4, cuarto bajo, recibiendo el importe en libranzas del Giro mutuo, letras de fácil cobro ó sellos de comunicaciones, con exclusion de los de guerra, certifiando las cartas cuando se remitan sellos. Los anuncios se insertan á precios convencionales.

ADVERTENCIA.

Rogamos encarecidamente á nuestros suscritores que nos avisen de cualquiera falta que adviertan en el reparto de este periódico.

LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

Prometimos en nuestro prospecto escribir revistas de tribunales, y resumen mensual de las sentencias del Consejo de Estado y Tribunal Supremo: dábamos con esto bien claramente á entender que la administración de justicia merecía de nuestro modesto diario particular y señalada atención. Y así es en efecto; creemos que todo país bien gobernado debe atender con grandísima preferencia á este punto importantísimo—el más importante á nuestro juicio—de la administración pública.

Y para que los lectores se persuadan de la sinceridad del propósito, comenzamos nuestras tareas sobre el particular consignando nuestra opinión sobre una reforma trascendental hecha por el Gobierno que preside el Sr. Cánovas del Castillo, en lo relativo á la administración de justicia. Nos referimos á la restauración de la sección de lo contencioso en el Consejo de Estado, y derogación del decreto del Gobierno provisional de 26 de noviembre de 1868.

Pocas, poquísimas cosas dispuso el señor Romero Ortiz, ministro de Gracia y Justicia de aquel Gobierno, de infausta memoria, que no merezcan nuestra aprobación. Y singular coincidencia! la única que recordamos haya sido digna de aplauso, es cabalmente la única que el Gobierno se ha apresurado á derogar. Comprenderíamos, aunque ciertamente no lo aplaudiríamos, que el Gobierno hubiese restaurado por completo todas las cosas al ser y estado en que se hallaban por setiembre de 1868. Habíalas buenas, malas y medianas; pero en gracia de las buenas, repetimos que comprenderíamos la restauración sin examen, y á descarga cerrada, de todas. Mas dejar subsistente la derogación de las buenas, y aun óptimas, y apresurarse á restaurar las malas, ó por lo menos medianas, es desgracia de esta nuestra pobre patria, que va dando tumbos y vuelcos como bajel sin timón. Mas volvamos al *canto llano* de la administración de justicia, y no nos metamos en contrapuntos que se suelen quebrar de soñiles, como dijo Maese Pedro, temeroso de la ira del manchego caballero. Decimos, pues, y afirmamos, que nosotros, de todas las cosas que hizo ó deshizo el Sr. Romero Ortiz, lo único acaso que habríamos respetado es la derogación de la jurisdicción contencioso-administrativa. La cual es de reciente importación extranjera, y ha sido generalmente mirada con desfavor, porque arranca de los tribunales muchas cuestiones que debían ser de su exclusiva competencia, según los principios fundamentales de la ciencia del derecho, y con arreglo á los antiguos usos y seculares tradiciones de nuestra patria.

Atribuir el conocimiento de pleitos que frecuentemente son cuestiones de derecho civil á corporaciones cuyos miembros no tienen el carácter de inamovibles ni costumbre de administrar justicia, y dejar su resolución definitiva y ejecutiva al Gobierno, árbitro de admitir ó desechar los fallos que el Consejo de Estado le consulta, no inspira completa confianza á los litigantes, ni al país, que ve que en último lugar una de las partes en el litigio viene á decidirlo. La justicia se administra en nombre del rey, cierto; pero por jueces y tribunales independientes, inamovibles, ó que debenserlo, y que no se consideran parte integrante de la administración propiamente dicha, ó sea de la administración activa. Nosotros llamaríamos á boca llana *poder al conjunto* de corporaciones ó personas encargadas de administrar justicia, no yella, como se le llama á veces, á esto de que vamos hablando *poder judicial*. Firme y verdadera garantía de los ciudadanos y de sus derechos legítimos

en toda clase de gobiernos, la administración de justicia ha de estar encomendada á cuerpos dotados de independencia, de libertad; sin trabas materiales ni morales; sin ligaduras con nadie, por alto que sea; sin más repetos que guardar que los debidos por ley y por conciencia á la justicia y al derecho. Y cuando el Gobierno entienda que los juzgadores prevarican por uno ú otro concepto, que fueren la vara de la justicia por cualquiera razón, que estimule el celo de los fiscales para que procesen y capitulen y persigan al juez ó magistrado prevaricador, ó débil, ó complaciente. No haya en esto disimulo, porque en tal materia no hay pecado venial. La inamovilidad debe ser completa, la independencia verdadera; pero la responsabilidad real, eficaz, positiva é incesante, juzgando acerca de ella, á petición, ya de los fiscales, ya de los ciudadanos, los mismos tribunales, y teniendo el espíritu de cuerpo el correctivo de la publicidad de los juicios y de las sentencias.

Apartemos, al llegar á este punto, una objeción que suele hacerse, y que nos parece digna de poco aprecio. ¿Por qué desconfiáis—se nos dice—del Consejo de Estado? ¿Por ventura no son respetabilísimos sus miembros? ¿No fueron siempre imparciales sus fallos?—Esta no es buena manera de discutir. Lo demuestra sencillamente el acto de retener el argumento y devolver la pregunta.—¿Por qué desconfiáis de los tribunales de la jurisdicción ordinaria? ¿Por ventura no son respetables sus individuos? ¿No fueron siempre justos sus fallos?—Esta no es la discusión científica y filosófica; esto es salirse de los términos verdaderos de la cuestión. Así no se discute; así se disputa, y disputar no es discutir ni dilucidar un asunto.—En este modo de razonar estaría de nuestro lado toda la ventaja, porque podríamos decir, y con efecto decimos, que la justicia ha de ser imparcial y parecerlo; que cuando no parezca imparcial no basta que lo sea, semejante en esto á las doncellas pudorosas y á las castas matronas, que han de ser honradas y además parecerlo, no dando lugar, con apariencias reprehensibles, ni á la más leve sospecha. ¿Hállase en estas condiciones de imparcialidad notoria la justicia aconsejada por un cuerpo que se considera, y con razón, como parte integrante de la administración activa, cuando esta es cabalmente la que litiga contra un particular? Pues añádate que no ya ese cuerpo, sino los mismos cuya conducta y cuyos actos y disposiciones constituyen el objeto del litigio, son los que tienen, aunque rara vez lo usen, el derecho de fallar, y se dará acertada solución al no difícil problema.

Sabemos los merecimientos del Consejo Real, hoy de Estado, en los años de 1853 y 54; recordamos con gusto la imparcialidad, la independencia, el brio con que aquel memorable cuerpo despachó las consultas relativas á famosos expedientes de ferro-carriles; no damos al olvido el crédito que alcanzó diciendo lisa y llanamente lo que se le ofrecía y parecía en cada uno de aquellos negocios sometidos á su examen y consulta; no dejamos de recordar que, por entonces, todos los derechos conculcados ó amenazados, todos los intereses lastimados, pedían ser llevados en consulta al Consejo Real, y que la opinión pública, alarmada, solamente quedaba tranquila cuando los negocios que más ruido metían eran examinados por el alto cuerpo consultivo. No hemos de parecernos, olvidando tales servicios del Consejo Real, á la revolución de 1854, precursora de la de 1868, que le declaró disuelto, y cesantes á sus miembros, redactándose el decreto, según por entonces se dijo, en una tienda de comestibles. Pero aquello, que era proceder con justicia en la esfera de las atribuciones consultivas, no era administrar justicia, en el sentido técnico que se da á esta expresión; y además, se hubiera podido inutilizar y hacer estéril si hubiera funcionado el Consejo como Tribunal. Con sólo haber

crédito á grande altura, porque la ley ordenaba que en las materias de que se trataba, antes de la resolución del Gobierno, fuese oído el parecer del Consejo. Pero lejos de ser este argumento en favor de la jurisdicción contencioso-administrativa atribuida al Gobierno, es *contraproducente*; porque si se hubiera tratado de litigio, el Gobierno hubiera podido (no decimos que lo hubiera hecho) ahogar toda discusión, impedir todo examen, con sólo denegar la vía contenciosa, como podía hacerlo, y privar al país de la garantía que por entonces reclamaba, de que fuese oída y conocida la opinión del Consejo Real.

Se ha hecho este artículo demasiado largo para las dimensiones de nuestro diario. Otro día, si Dios quiere, continuaremos.

La *Correspondencia de España* parece índice acabado y espejo fidelísimo del estado moral é intelectual de los tiempos que alcanzamos. No hay cosa mala que allí no encuentre asiento propio, ni disparate que en sus columnas no vuelvo á todos los vientos de la fama.

Anoche publica un *reclamo* (así se llaman en lenguaje periodístico los anuncios laudatorios que el propio interesado hace de su industria ó mercancía en forma de suelto de redacción) de los hermanos Davenport, que después de haber recorrido las primeras capitales de Europa y América, vienen á dar en España sesiones de espiritismo.

Parece ser que los Sres. Davenport piensan presentarse en público á ganar unos cuartos con sus habilidades; pero diestros en el arte de llamar la atención de los incautos, comenzaron anteayer por dar una fiestecita escogida en su casa, invitando á la prensa, para que cantase sus glorias.

Suponemos, y es lo más caritativo que podemos suponer, que los Sres. Davenport serán dos prestidigitadores que se ganarán la vida haciendo juegos de manos. Pero se llaman espiritistas, y ningún católico puede asistir á sus experimentos supersticiosos, ni anunciarlos, ni hablar de ellos sin condenarlos, y anatematizar la secta más horrible y abominable de cuantas ha engendrado la astucia del infierno.

Ya hace tiempo que los espiritistas tienen en Madrid reuniones, donde predicantales disparates que no parece que quepan en humano entendimiento, aunque el entendimiento sea espiritista. Ya hace tiempo que los espiritistas procuran propagar en España su horrible superstición, y no sin fruto, porque en ninguna parte faltan necios, y en España ahora abundan los ignorantes. Sólo falta que tales sectarios hagan público su culto diabólico, y que la *Correspondencia* se haga órgano de sus despropósitos y de sus abominaciones.

Cartas recibidas en Madrid nos dan cuenta de hallarse gravísimo en Jerez el respetable Sr. D. Bartolomé Vergara, cuyo nombre es bendecido y objeto de la mayor veneración en la provincia de Cádiz.

Anciano encanecido en la práctica de las virtudes, cristiano verdadero, cuyo corazón sólo ha palpitado á los sentimientos católicos, cumplido caballero que sólo ha aspirado al triunfo de la justicia sobre el desorden y la impiedad, y padre de familia bondadoso, el ilustre enfermo ve acercarse la hora de su muerte con la serenidad cristiana que sólo pueden prestarle una conciencia justa, una caridad inagotable y un acendrado españolismo.

Poquísimas esperanzas abriga la ciencia de salvar al enfermo: muchas y fervientes oraciones se elevan á Dios por él, no siendo las menos las que hacen las innumerables familias pobres á quienes ha favorecido su caritativa mano.

Suplicamos á nuestros lectores pidan al Señor le dé lo que más le convenga para la salvación de su alma.

Para los aficionados á la historia moderna, que desearán saber algo más de lo que un periódico de los Estados Unidos, y que nosotros reproducimos de un diario ministerial:

«El de Versalles es una reunión de hombres honrados, pero que hacen á su país cuanto daño pueden; el de Alemania es una reunión de estudiantantes que se pelean con su protector, pero al fin le obedecen; el de Inglaterra un conjunto de fabricantes que hacen cuanto pueden para aumentar la exportación; el de los Estados Unidos una reunión de hombres raros, armados con revolver; el de Italia, garibaldinos en sesión.»

Tiene gracia el siguiente suelto, ó cosa así, que vió anoche la luz en las columnas de *La Correspondencia*:

«Dada la actitud del partido constitucional, que aspira á ser el partido más liberal dentro de la dinastía, y la de algunos radicales que aceptan la legalidad y se mantienen dentro del credo democrático sin exageraciones, no sería difícil que llegaran á un acuerdo más ó menos condicional, más ó menos inmediato, y se reorganizaran, como hace tiempo indicamos, el antiguo partido progresista, dentro de las nuevas condiciones de la época. La única dificultad que para ello habrá sería la de jefatura. Esto deducian hoy personas enteradas del espíritu que ha reinado hoy en cierta reunión, celebrada por unos cuantos hombres políticos que aspiran á consolidar la era de la paz y de la vida de los pueblos más adelantados en costumbres políticas.»

Jerigonza que, traducida al castellano, quiere decir: «Sagastinos y radicales no tienen inconveniente en fundirse en un solo partido, si esto facilita su acceso al poder; pero se tropieza con una seria dificultad, la de que todos quieren ser jefes.»

Es decir, que para unos y para otros nada significan, ni la cuestión de principios, ni los abismos que entre personas de sermidecoro hubieran ahondado los *sibados negros* del Congreso, ni aun siquiera los agravios personalísimos, y sangrientos rencores que levantó en sus diferentes dominaciones Sagasta.

Todo esto puede olvidarse y aun perdonarse; con esto puede transigirse: con lo que no se puede transigir es con que otro forme una pulgada más adelante, porque eso le pone también más en disponibilidad de ser ministro.

Y aún habrá quien niegue á los revolucionarios humildad de carácter y mansedumbre de corazón!

Contestando á quejas, que nos parecen fundadas, de *El Imparcial*, dice *El Diario Español* en tono de quien está autorizado para decirlo:

«Nuestro colega debe tener entendido, porque esta es la verdad, que el gobierno solamente reprime á la prensa en la publicación de noticias referentes á la guerra que pueden ocasionar perjuicio á la causa liberal con indiscreciones inoportunas, y solamente prohíbe que se ataquen las instituciones fundamentales, que deben respetar los ciudadanos todos, si se quiere que alguna vez vuelva esta desventurada nación á recobrar su calma y su quietud.

Por lo demás, el gobierno no se opone á que se discutan y censuren todos sus actos, y está dispuesto á conservar á los periódicos toda la libertad que puedan apetecer para este género de discusiones, como lo ha demostrado hasta ahora.»

Pues si el gobierno no se opone á que se discutan y censuren sus actos, ¿quisiéramos merecer de *El Diario Español* que nos explicase una cosa que no comprendemos.

Al gobierno le ha parecido que no debía restablecer la previa censura, y esto es natural y lógico. Pero en beneficio de la prensa periódica ha establecido una especie de censura voluntaria y privada, donde sus delegados advierten á los periódicos que quieren consultarles, lo que el gobierno no dejará correr, y esto en efecto, nos parece muy beneficioso para la prensa.

Pero una y otra vez ha declarado el gobierno, que después de esta censura voluntaria, suspenderá un periódico cuando lo tenga por conveniente, aun por aquellas cosas que los delegados del gobierno hayan censurado y dejado pasar. Y, en efecto, recientemente han sido suspendidos *El Eco de España* y *La Iberia* por haber publicado despachos telegráficos que, como dice anoche

«...había sido revisados por el gobierno, ¿es justo y equitativo? No le parece que de este modo es completamente *culpa el buda-*

